



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CONFLICTO DE TRABAJO 2/2011-C  
SUSCITADO ENTRE JUAN PABLO  
HUERTA GARCÍA Y EL DIRECTOR  
GENERAL DEL CANAL JUDICIAL DE  
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN.**

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del primero de octubre de dos mil doce.

**VISTOS; Y,  
RESUELTO:**



LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
AL DE ACUERDO

**PRIMERO. JUAN PABLO HUERTA GARCÍA** mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil once ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido el día diecisiete siguiente, en la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, demandó del Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pago de las siguientes:

**"PRESTACIONES**

- a) **Indemnización Constitucional de tres meses de salarios, por el injustificado despido de que fui objeto en dicha dependencia.**

- b) Pago de los salarios caídos que me correspondan desde la fecha del injustificado despido, hasta el día en que se dé cumplimiento total y definitivo a la resolución que dicte esta H. Comisión, al presente conflicto planteado.**
- c) La homologación del salario que percibía en dicha dependencia como secretario y el de productor de video que era el realmente desempeñado, por todo el tiempo laborado y por lo tanto el pago correspondiente al mismo.**
- d) El pago de tiempo extraordinario que laboré para la demandada por todo el tiempo de servicios que jamás me fueron cubiertos conforme a derecho.**
- e) El pago proporcional al tiempo laborado en el presente año de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, el bono cuatrimestral, asignación trimestral de veintidós mil quince pesos, ayuda de despensa anual, ayuda de vestuario.**

Fundan esta demanda las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que enseguida se mencionan:

**1°.** Ingresé a laborar en el Canal Judicial de la Federación, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 1° de febrero del año 2008, contratándome con el puesto de secretaria en una jornada legal de trabajo de ocho horas a la semana con un salario mensual de \$18,803.04 pagaderos quincenalmente. Pero desempeñando realmente una categoría de productor de video y audio en dicha Dirección y señalándose en el recibo de pago que mi categoría lo era de confianza como en el nombramiento, pero en realidad por la naturaleza de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

función desempeñada y las labores encomendadas no se encuentran en los numerados en el artículo 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

2°. Durante el desempeño de mis labores siempre lo hice con esmero, dedicación y honradez necesarios, habiéndome entregado premiación por diversos reportajes como "Pantalla de Cristal" y "Rostros de la Discriminación de Gilberto Rincón Gallardo", Premio Nacional de Periodismo por el programa "Voces Origen de una Nación" como colaborador de dichos videos.

3°. En tales condiciones desempeñaba mis servicios en dicha dependencia, teniendo como jefe inmediato al Sr. Roberto Espinosa Ibarra después al Subdirector de producción al Sr. Marco Antonio Silva y el Director General Sr. Enrique Rodríguez. Con fecha nueve de marzo del presente año recibí a las 18:00 horas el video y audio del reportaje especial "Poblaciones Callejeras" de la reportera Martha Rodríguez, revisando el material grabado y aspectos para ilustrar el reportaje y al percatarme que faltaba material para ilustrar dí vista al Sr. Marco Antonio Silva, dándole mis puntos de vista para ilustrar el reportaje indicándome que eran estupendas mis anotaciones y que mandaría al día siguiente a grabar esos aspectos, comentándole que era bueno porque el reportaje saldría al aire el dieciocho de marzo del presente año. El jueves 17 de marzo del año en curso a las 18:00 horas se me acercó el Sr. Marco Antonio Silva con la reportera para preguntarme si podría tener (sic.) para el viernes 18 de marzo de este año (2011). Para aprobarlo y transmitirlo, indicándole que era difícil porque teníamos el tiempo encima y diciéndome que a qué hora podríamos tenerlo, le indiqué que como a las cinco de la tarde; para poder cumplir con lo prometido laboré todo el jueves en la tarde y hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente

viernes. Ese día viernes 18 de marzo del año en curso me presenté en las oficinas del Sr. Marco Antonio Silva, le comenté que ya estaba listo el reportaje y faltaban sólo algunos pequeños detalles e indicándome que subiría inmediatamente; en eso llegó la reportera Martha Rodríguez a las 16.40 horas, para ver cómo había quedado el reportaje, esperando al Sr. Marco Antonio Silva que subiera, a las 17:15 horas la reportera me preguntó qué pasaría con el subdirector de producción para revisar el reportaje. Al llegar a su oficina del Sr. Marco Antonio Silva, me dí cuenta que jugaba Play Station con otros compañeros Carlos Jafet Flores, José Luis Ferreira y Miguel Manjarrez e insistí en que ya estaba listo el reportaje que teníamos tiempo de estarlo esperando, cosa que le molestó e indicándome "si ahorita voy" regresé con la reportera que ya me esperaba y estaba además con la Sra. Verónica González, también reportera del canal judicial e indicándoles que estaba ocupado y respondiéndome que si pero jugando Play Station lo que afirmé. Se presentó hasta las 18:15 horas que de manera prepotente y en forma molesta se puso los audífonos de audio y empezó a revisar el reportaje y sin terminar de verlo le dijo a la reportera Martha Rodríguez esto está mal, cosa que nos sorprendió e indicándome que tenía que quitar este insert (sic.), anotándolo después siguió observándolo y me dijo: tienes que mover toda la estructura, aclarando que la estructura estaba elaborada desde hacía una semana, fecha en que le pedí al Sr. Silva las imágenes que faltaban. Entonces me dijo el Sr. Silva cómo vez, respondiéndole va a estar cañón porque es rehacerlo son muchos cambios, se deben volver a procesar en el sistema y ya está musicalizado; aclarando que la musicalización se hace en un estudio fuera del canal y en el transcurso de la mañana y esas modificaciones no se pueden hacer en menos de dos o tres horas. Todo esto se lo dije al Sr. Marco Antonio Silva y se molestó mucho, aventando los audífonos a la mesa





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

levantándose me dijo: no hagas nada déjalo así no hagas nada y se retiró; la reportera y yo quedamos sorprendidos.

4°. El lunes 21 de marzo del año en curso día festivo, me presente a laborar al canal para editar y post producir la nota de la ceremonia del 205 aniversario de Don Benito Juárez, desde las 15:00 horas hasta las 0:30 horas del día siguiente, esa nota se utilizó en el noticiario ADN de las 21:00 horas, de las 24:00 horas y 7:00 de la mañana del día siguiente.

5°. El día martes 22 de marzo del presente año, al llegar al canal mi jefe inmediato Sr. Roberto Espinoza Ibarra, me indicó que por órdenes del subdirector de producción Sr. Marco Antonio Silva, debía de entregar el equipo de trabajo en donde realizo los reportajes que es una computadora Mac portátil. En esa misma fecha me llamaron de la oficina del Sr. Silva, porque tenía que presentarme a una junta el día siguiente miércoles 23 de marzo del año en curso a las 17:00 horas, cambiando posteriormente varias veces el horario quedando a las 18:30 horas, presentándome a esa hora el día señalado con mi jefe el Sr. Roberto Espinoza Ibarra, recibidos por el Sr. Marco Antonio Silva, con voz prepotente me indicó: Yo no puedo trabajar con una persona como tú, que no acata mis órdenes, por eso te estoy quitando de hacer los reportajes especiales, debes entregar el equipo; tú ya no entras en mis planes y para evitar subir el tono y llegar a los madrazos, estás fuera, porque tú no me hiciste caso y desobedeciste una orden mía. Situación falsa porque lo único que le manifesté que estaba cañón y que no iba a terminar a tiempo para que saliera al aire. Insistiendo el Sr. Silva yo soy tu jefe y haces lo que yo te pida.

Yo le comente al Sr. Silva en ese momento que no había respeto para mi trabajo, ya que había trabajado toda la tarde del jueves y el viernes en la madrugada hasta las 8:00 de la

mañana para tenerlo listo el reporte (sic.) a la hora acordada y respondiéndome: Si te sientes ofendido, no me interesa, tu no acataste y eso te traerá consecuencias. A lo que conteste ¿me está amenazando?, no te estoy advirtiéndote que vas a pagar por este, que va haber (sic.) consecuencias, ante ello me levanté y me retiré diciéndole mis respetos, para ti. Y saliéndome de la oficina. Informándome mi jefe Sr. Roberto Espinoza I., más tarde que habría otra junta el día siguiente a las 12:00 horas con el Director General Enrique Rodríguez.

6°. El jueves 24 de marzo del año en curso (2011) me presenté en la oficina del Director General, junto con el Sr. Roberto Espinoza Ibarra, e indicándonos que ahí no iba ser la junta sino en la oficina del jurídico del Dr. Manuel Rodríguez, llegando estaba cerrada la puerta y tocamos al abrir la puerta ya estaba el Sr. Marco Antonio Silva con el Dr. Manuel Rodríguez e indicándonos que los esperáramos y después de cinco minutos nos permitieron pasar. Inició la reunión hablando el Sr. Marco Antonio Silva y después yo y como testigo mi jefe el Sr. Roberto Espinoza Ibarra. En ese momento me indicó el Dr. Manuel Rodríguez, que yo era una gente de confianza y que mi jefe el Sr. Marco Antonio Silva me había perdido la confianza y quería que firmara mi renuncia casi de inmediato, si accedía me daban todo el mes de abril de sueldo y el bono cuatrimestral, pero si me atrevía a demandarlos no ganaría nada, porque el personal de confianza no tenía derechos laborales. Poniéndome ejemplos y que si no aceptaba a partir del día siguiente me cancelarían el bono cuatrimestral, todas mis prestaciones, los derechos que tenía y mi sueldo se reduciría al 50% me dijo que nadie había ganado por ser de confianza que tendría que comparecer en un comité donde me encontraría con los viejitos. Dándome dos horas para decidir, a lo cual me rehúse, para ello mi jefe inmediato el Sr. Roberto Espinoza Ibarra, les dijo: ¿Hay alguna posibilidad de que esto termine con una disculpa?, a lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cual el Sr. Marco Antonio Silva señaló: Te agradezco Roberto. Lo has intentado por segunda ocasión, pero mi decisión es definitiva, no le tengo confianza y no lo quiero en mi equipo. Al escuchar lo anterior indiqué que no había tenido una audiencia para explicar mi posición y que si eso era todo que si entonces me retiré de la oficina.

7°. En esa misma fecha y hora al término de la junta arriba señalada me dirigí con el Director General del Canal Judicial, Sr. Enrique Rodríguez, para que escuchara mi posición, preguntándole a su secretaria si me podría recibir e indicándome que en unos veinte minutos por lo que fui a mi lugar de trabajo, llamándome después y al presentarme con el Director General Sr. Enrique Rodríguez, estaban ahí el Dr. Manuel Rodríguez y Marco Antonio Silva, y en medio de los tres había una silla vacía estando la puerta abierta de la oficina solicite si la podía cerrar e indicándome el Director que no para que todos escucharan, entonces me senté en medio de ellos y le dije al Director General Enrique Rodríguez: yo sé que has de estar molesto por lo que te han contado, pero creo sería válido escuchar mi versión, indicándome para eso estas aquí y diciéndome además sólo tienes cinco minutos, no más por lo que le indiqué sería breve, diciéndole que lamentaba tener que llegar a ese punto e interrumpiéndome nuevamente me señaló: todo lo que el subdirector de producción Sr. Marco Antonio Silva dijera él lo avalaba y yo había cometido un grave error en desacatar sus órdenes, quise intervenir para defenderme pero me volvió a interrumpir y muy molesto levantando la voz me dijo: eso fue tu error ¿sí o no? y nuevamente me gritó ¿sí o no? señalándole que me permitiera un momento, pero no me dejó hablar de los cinco minutos que me había dado, sino sólo unas palabras e insistiendo: Ahora el jurídico te ha hecho una buena propuesta, si quieres salir por la puerta grande tómalala, si quieres salir por la puerta chica tendrás problemas, todas las

A FEDERACIÓN  
CIA DE LA NACIÓN  
DE ACUERDOS

*denuncias las hemos ganado, todas, ninguna hemos perdido, así que te recomiendo no nos denuncies. La situación para mí era muy intimidante y sólo le dije: cuando llegué aquí hice un compromiso contigo, que era trabajar muy duro para la consolidación del Canal Judicial y en todo momento yo he cumplido con esa promesa, me he muerto en la raya por el Canal Judicial, gracias por la oportunidad, me levanté y me despedí de manos y me salí e indicándome que tenía dos horas para firmar mi renuncia, pedí más tiempo y dijeron que hasta el día 25 de marzo del año en curso a las once de la mañana.*

*Por todo lo anterior ya narrado se trata de un despido injustificado, así mismo no se me dio por escrito las causas del despido por lo que debe de considerarse como injustificado, con base en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que reclamo las prestaciones del proemio de la demanda."*

**SEGUNDO.** Por auto de veinte de mayo de dos mil once, la tercera integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ordenó la formación del expediente respectivo, el que registró con el número 2/2011-C; además, previno al actor para que precisara las horas extras cuyo pago reclamaba, así como los hechos que sustentaban esa pretensión, sin omitir precisar la jornada legal y la hora en que empezaba y concluía la jornada extraordinaria en cada uno de los días que reclamara su pago (folio 7).

**TERCERO.** Mediante escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil once, ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, el actor desahogó la prevención ordenada, en los términos siguientes:





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"A) En la fecha de ingreso a mi trabajo se me asignó un horario de labores de las 14:00 a las 24:00 horas de lunes a viernes descansando sábados y domingos de cada semana.

B) En dichas condiciones estuve laborando hasta el año 2010 que con motivo del Bicentenario de la Independencia de la República Mexicana y el Centenario de la Revolución Mexicana el trabajo aumentó para todo el personal del Canal Judicial. Por lo que desde ese inicio de año o sea a partir del 4 de enero del 2010 empezamos a salir hasta las 3:00 y 4:00 de la mañana todos los días, con el pretexto de que era cooperación para darle brillantez a las festividades que se aproximaban, ya que esto era por órdenes superiores, todo ello hasta un día antes de que fui despedido o sea del 24 de marzo del 2011, por lo tanto laboraba un horario de 5 horas extras diariamente que jamás me fueron cubiertas conforme a derecho, excepción de los días 17 de marzo que se laboró hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente y del día 21 de marzo del 2011 hasta las 6:00 de la mañana, con tales aclaraciones se reclama el pago del tiempo extraordinario en los términos a los que se refieren los artículos 66 y 67 de la Ley Federal del Trabajo" (foja 14).



LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
AL DE ACUERDOS

**CUARTO.** En proveído del treinta y uno de mayo de dos mil once se admitió la demanda formulada en contra del Director General del Canal Judicial de este Alto Tribunal; se tuvieron por ofrecidas las pruebas que describió en su escrito de demanda, reservándose acordar sobre su admisión o desechamiento para el momento procesal oportuno, en términos del artículo 132 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, se ordenó emplazar al demandado para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra.



**QUINTO.** Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil once, ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, el Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó se le reconociera la personalidad con la que compareció, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, nombrando como sus representantes y apoderados legales al licenciado Marco Antonio Bouchain Rodríguez y al Dr. José Manuel Rodríguez Reyes conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y dio contestación a la demanda dentro del plazo legal, en los siguientes términos:

### **"PRESTACIONES**

***En relación con el objeto de la demanda presentada manifiesto que:***

- 1. Carece de acción y derecho el actor para reclamar la Indemnización Constitucional de tres meses de salarios por el despido del que dice fue objeto, en virtud de que el demandante al término de una licencia médica que abarcó del día 28 al 30 de marzo de 2001 (sic.), dejó de desempeñar su puesto de Secretaria, Rango C, puesto de confianza a partir del lunes 4 de abril de 2011, aspecto que se repitió durante los días subsecuentes cinco, seis, siete, ocho, once y doce de abril de dos mil once, situación que motivó que emitiera el oficio número DGCJ/0259/2011 de fecha 13 de abril de 2011, dirigido al Director General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual solicito se le apliquen los descuentos correspondientes al C. Juan Pablo Huerta García por sus inasistencias de los días 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 del citado mes y año (abril de dos mil once).*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En respuesta la Dirección General de Recursos Humanos me contestó a través del oficio número DGRH/DRL/355/2011 de fecha 25 de abril de 2011, que independientemente de los ajustes al salario que se llevarán a cabo, me sugieren implemente las acciones correspondientes al abandono de empleo en que ha incurrido el C. Juan Pablo Huerta García.

Derivado de lo anterior, por oficio número DG CJ/0320/2011 de fecha 3 de mayo de 2011 y recibido en la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al día siguiente, informé que no obstante de la búsqueda exhaustiva que se hizo del trabajador vía telefónica y en su domicilio, el señor Juan Pablo Huerta García no se había presentado a laborar, por lo que solicité se resolviera dar por terminados los efectos del nombramiento del servidor público por haberse ubicado en la causal de cese por abandono de empleo de acuerdo al acta de abandono de empleo implementada por el Subdirector General de Producción el día tres de mayo de dos mil once, en la Dirección General del Canal Judicial documentos que serán ofrecidos en la presente contestación como pruebas documentales públicas.

En virtud de lo anterior, es falso que al C. Juan Pablo Huerta García se le haya despedido de su empleo ya sea el 24 ó 25 (sic.) de marzo de 2011 de acuerdo a las fechas indicadas en su demanda, pues esos días fueron motivo de solicitud de descuento conforme a la petición que hice a la Dirección General de Recursos Humanos a través del oficio número DG CJ/0223/2011 de fecha 29 de marzo de 2011, asimismo, el día 1 de abril el actor presentó una licencia médica que ampara sus inasistencias de los días 28 al 30 de marzo de 2011, documento que envíe a la Dirección General de Recursos Humanos a través del oficio número DG CJ/034/2011 que se

encuentra agregado al expediente personal que de dicho actor se lleva en la Dirección General de Recursos Humanos y que se solicitará sea presentada como prueba documental pública en el presente conflicto de trabajo a través de la contestación que en este acto se efectúa, incluso en la demanda presentada por el actor es obscura por no indicar: cómo, en dónde y a qué hora se le despidió, esto cuando el actor señala en su escrito de demanda "Por todo lo anterior ya narrado se trata de un despido injustificado; así mismo no se me dio por escrito las causas del despido, por lo que debe considerarse como injustificado" al no recibir anuncio de despido.

Con independencia de lo anterior, al ser un trabajador de confianza el C. Juan Pablo Huerta García al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es improcedente reclamar el pago de Indemnización Constitucional que por esta vía demanda, ya que es un derecho exclusivo del personal de base del Alto Tribunal.

A mayor explicación, está el hecho de que el demandante fue un trabajador de confianza al servicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, se encuentra excluido de la aplicación de este ordenamiento legal, por lo tanto es improcedente la indemnización requerida.

Asimismo, todos los derechos del actor le fueron plenamente cubiertos en términos de la fracción XIV del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, es decir, sus salarios y prestaciones, así como los beneficios de la seguridad social le fueron plenamente satisfechos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2. Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de los salarios caídos que se generen desde la fecha del injustificado despido, al no existir fundamento de hecho ni de derecho para tal reclamación, ya que el derecho a recibir el pago de los salarios caídos se genera en caso de que exista un despido injustificado, situación que en este caso no se dio, ya que al haberse ubicado el C. Juan Pablo Huerta García en la causal de cese de los efectos del nombramiento por abandono de empleo se justifica su remoción, por lo que la reclamación de condena de pago de salarios caídos es improcedente.

Asimismo, al ser una prestación accesorio de la acción principal de Indemnización Constitucional intentada por la parte actora, deberá seguir la suerte de esta última, es decir, si ésta es improcedente lo será también aquélla.



AL DE LA FEDERACIÓN  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS

3. Carece de acción y derecho el actor para reclamar la homologación del salario que percibía del cargo de secretaria al de productor de video, en razón de que los salarios que recibió están conforme al puesto asignado de Secretaria, Rango C, puesto de confianza, designación que fue aceptada por el demandante y cuya firma de aceptación se encuentra asentada en el nombramiento conferido, como se comprobará en el procedimiento a través de los diversos nombramientos otorgados al actor y que se encuentran agregados en el expediente personal que se solicitará se exhiba por parte de la Dirección General de Recursos Humanos como prueba documental pública. Asimismo, es improcedente la homologación demandada en razón de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no existe el cargo de productor de video reclamado, como se acreditará con la exhibición del Acuerdo General Plenario 10/2009 en cuyo anexo 1 se encuentran consignados los puestos

existentes en este Alto Tribunal, Acuerdo que será ofrecido en esta contestación de demanda como prueba documental pública.

4. Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de horas extraordinarias en virtud de que el actor no las laboró y por ende no generó el derecho a pago alguno por ese concepto, en razón de que en el nombramiento conferido de Secretaria, Rango C, puesto de confianza se asentó que la jornada de trabajo es Diurna y por disposición del artículo 21 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las veinte horas, el C. Juan Pablo Huerta García contaba con un horario de las trece a las veinte horas, de lunes a viernes, por lo que la pretensión de remunerarle tiempo extraordinario es improcedente, en razón de que no existió la prestación de tiempo extraordinario por parte del actor, además que es inverosímil que haya laborado el horario que relata en su demanda pues no existen registros de la prestación del servicio, así como la petición y autorización del Alto Tribunal para prolongar la jornada de trabajo. Resulta ilustrativo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

**“HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.”**

(Se transcribe).

De manera cautelar y sin que ello implique reconocimiento de acción o derecho alguno a favor del actor, con fundamento en el





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123

Constitucional, **OPONGO FORMALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN** respecto de toda reclamación que formule

la parte actora por concepto de pago de tiempo extra o cualquier otra prestación que el actor reclame por un periodo superior a un año comprendido entre el 3 de mayo de 2011, (fecha de presentación de la demanda) y el 2 de mayo de 2010, toda vez que tales reclamaciones se encontrarían prescritas al haber transcurrido en exceso el plazo de un año establecido por el precepto legal previamente invocado, para formular cualquier reclamación al respecto.



AL DE LA FEDERACIÓN  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDO

5. Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago proporcional de vacaciones y prima vacacional al tiempo laborado en el presente año (2011), en virtud de la baja en el servicio decretada al actor por haberse ubicado en la causal de cese por abandono de empleo contemplada en el artículo 46, fracción de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no obstante en caso de proceder algún pago será en forma proporcional al tiempo efectivo de servicios prestados.

Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago por concepto de aguinaldo correspondiente a 2011, derivado del hecho de que el demandante sólo prestó sus servicios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el lapso comprendido del 1º de enero al 1º de abril de 2011, por el que su pago en caso de proceder será cubierta en forma proporcional al tiempo efectivo de servicios.

Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de un bono cuatrimestral, derivado del hecho de que la prestación que demanda ya le ha sido cubierta, pues al causar baja del

*servicio por abandono de empleo el 4 de mayo de 2011, la prestación denominada "Asignaciones Adicionales", le fue pagada en el mes de marzo de 2011, por lo que es improcedente reclamar su pago **OPONIÉNDOSE FORMALMENTE AL EXCEPCIÓN DE PAGO** en relación a las "Asignaciones Adicionales" correspondientes al primer periodo del año 2011.*

*Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de asignación trimestral de veintidós mil quince pesos, por tratarse de una prestación extralegal le corresponde al actor probar su otorgamiento. Resulta ilustrativo de lo anterior, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación:*

**"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE."** (Se transcribe)

*Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de la prestación de ayuda de despensa anual, en razón de que es un beneficio aplicable al personal que se encuentra activo en la fecha de pago que es en el mes de noviembre, por lo tanto al haber causado baja del servicio derivada del cese decretado por haber incurrido en el causal contemplada por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por abandono de empleo, no se encuentra en los supuestos de norma para ser beneficiario del pago, por lo cual **OPONGO FORMALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA.***

*Carece de acción y derecho el actor para reclamar el pago de ayuda de vestuario, en razón de que el vestuario es un beneficio aplicable al personal que se encuentra activo en la fecha de pago que puede ser en los meses de octubre, noviembre o diciembre del año correspondiente, por lo tanto al*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

haber causado baja del servicio derivada del cese decretado por haber incurrido en el causal contemplada por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por abandono de empleo, no se encuentra en los supuestos de norma para ser beneficiario del pago, por lo cual **OPONGO FORMALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA.**

Por lo expuesto, niego que al accionante le asista razón y derecho algunos para promover en la vía y forma en que lo hace, y desde ahora hago valer los medios de defensa que consisten en las siguientes:

#### **EXCEPCIONES Y DEFENSAS**

**PRIMERO. FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-** Del demandante para solicitar la indemnización constitucional, en razón de que su baja obedeció a que el demandante causó baja del servicio por el abandono de empleo en que incurrió al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril y el dos y tres de mayo de dos mil once, con efectos de la baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo aplicable al caso concreto lo dispuesto en la Tesis de Jurisprudencia número 559, de la entonces Cuarta Sala que integró anteriormente este Alto Tribunal al tenor siguiente:



**"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ABANDONO DE EMPLEO POR LOS." (Se transcribe).**

*Por tanto, tampoco puede prosperar su petición de pago de salarios caídos, habida cuenta que se trata de una prestación accesoria que sigue la suerte de la principal.*

**SEGUNDO. FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-** *Del actor para reclamar las prestaciones a que alude en su demanda, en razón de que se encuentra excluido del derecho para demandar la Indemnización Constitucional, en atención a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del apartado B del Artículo 123 Constitucional, se le han cubierto los salarios devengados y ya recibió los beneficios de la seguridad social a que tiene derecho en el tiempo en que la relación laboral establecida con el actor ha estado vigente.*

*En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, corresponde a esta Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, probar las excepciones opuestas, es decir, acreditar que el actor ha sido nombrado en puestos que tienen el carácter de confianza, según lo prevén los artículos 123, Apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio del Estado, y 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que, por ello, carece del derecho a la estabilidad en el empleo, extremo que acredita la ausencia del derecho en cuanto a la pretensión principal (Indemnización Constitucional), y a la*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

referida accesoria (pago de salarios caídos), ya que en la secuela procedimental (sic).

Se probará que la plaza que ocupaba (Secretaria, Rango C, puesto de Confianza), y de la cual fue separado por el abandono de empleo en que incurrió al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril y el dos y tres de mayo de dos mil once, con efectos de la baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar infundada la pretensión de Indemnización Constitucional ejercida, así como el pago de salarios caídos y demás prestaciones.

En relación con lo anterior, por principio conviene precisar que tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de este Alto Tribunal, atendiendo a lo previsto en el apartado B del artículo 123 constitucional, los trabajadores de confianza únicamente disfrutan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, de ahí que no gozan de estabilidad en el empleo y por la naturaleza especial de sus funciones pueden ser designados y removidos libremente por lo servidores públicos facultados para ello, por lo que esos trabajadores no pueden válidamente demandar la Indemnización Constitucional.

Al respecto, resultan ilustrativas las tesis aisladas y jurisprudenciales que llevan por rubro, texto y datos de identificación:



**"TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE LOS".**

*(Se transcribe).*

**"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE."** *(Se transcribe).*

**"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. AL NO GOZAR DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CARECEN DEL DERECHO A DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."** *(Se transcribe).*

*Una vez precisado lo anterior, de especial relevancia resulta analizar las disposiciones constitucionales y legales que en relación con los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen cuáles de ellos serán considerados de confianza: Al respecto, destaca que los artículos 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución General de la República, 5º, fracción IV, 6º y 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan:*

*En relación con lo dispuesto en estos numerales, por principio, se advierte que al establecerse en la fracción XIV del apartado*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL QUE "LA LEY DETERMINARÁ LOS CARGOS QUE SERÁN CONSIDERADOS DE CONFIANZA". EL Poder Revisor de la Constitución tuvo clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por su cargo, es decir, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social.

Así, resulta patente que conforme al lo previsto en el citado precepto constitucional la determinación sobre qué trabajadores al servicio del Estado son de confianza y, por exclusión, cuáles son de base, quedó a la discreción del legislador precisándose en la propia Norma Fundamental que para ello éste señalaría qué cargos son de confianza, lo que implica, atendiendo a que todo cargo público confiere una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, no permite desconocer que, ocasionalmente, puede no suceder con motivo de que el patrón equiparado confiera esta última para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza.

Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza cuando sea necesario determinar si un específico trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, ya que de considerarse exclusivamente la denominación de éste,

se podría sujetar la voluntad soberana a lo determinado en el acto administrativo mediante el cual el patrón equiparado nombra a un servidor público, cuando es éste el que debe someterse a la majestad de la Constitución General de la República y de las leyes emanadas de ésta.

Ante ello, de la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 5º y 6º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se arriba al convencimiento de que con independencia de que los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se les otorgue algún nombramiento de los previstos en los citados artículos 5º y 180, es menester atender a la naturaleza de las funciones que desarrollan y no a la denominación del nombramiento, por tanto, debe estimarse que en este Alto Tribunal son servidores públicos de confianza los que realizan las atribuciones propias del secretario general de acuerdos, el subsecretarios y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de acuerdos, los actuarios, la persona o personas designadas por su Presidente para auxiliarlo en las funciones administrativas, el Coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, los directores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de departamento, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.

En tal virtud, para determinar cuándo un servidor público de este Alto Tribunal es un trabajador de confianza o de base, debe atenderse a las funciones que le corresponde desarrollar, con independencia de la denominación del puesto que ocupe, pues si tal distinción resulta relevante para efectos constitucionales, en virtud de que el trabajador de base goza de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

estabilidad en el empleo y el de confianza no, para arribar a una conclusión sobre la existencia de esa prerrogativa debe adoptarse un criterio que atienda a la esencia de las cargas de trabajo y no a la mera formalidad de la denominación del puesto, ya que de lo contrario se dejaría de lado lo dispuesto en la Constitución General de la República y precisado por el legislador en ejercicio de la potestad conferida en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de esa Norma Fundamental, quedando al arbitrio del patrón equiparado determinar qué funciones de los trabajadores al servicio del Estado son propias de los de confianza y cuáles de los de base.

En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada XXXII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 7, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto:

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUEL”. (Se transcribe).**

En este contexto normativo, en el caso, debe recordarse que la pretensión del actor consiste en obtener la Indemnización Constitucional, ya que manifiesta fue despedido injustificadamente. Al respecto, es conveniente precisar que contrario a lo manifestado por el demandante, la baja en el servicio obedeció a que el actor abandonó el empleo al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintiocho y veintinueve de abril y el dos y tres de mayo de dos mil once,



decretándose su baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Asimismo, deben tomarse en cuenta la cédula de funciones que se encuentra integrada en el expediente personal del actor y que se ofrece como prueba documental pública de nuestra parte, por lo que se solicitará a esa instructora sea requerido al Director General de Recursos Humanos para que lo exhiba y surta sus efectos legales correspondientes, en dicha cédula se observa que dentro de las actividades que desarrolla el actor se encuentra la relativa a controlar la gestión de documentos y coordinar la distribución de la cabinas de edición control de imágenes y stock, guardar confidencialidad de la información a la que han tenido acceso por la naturaleza de su función dentro de un medio de comunicación como el canal judicial (protección constitucional de datos personales). De lo anterior, se sigue que por las funciones desempeñadas por el actor sí llevó a cabo labores propias de un trabajador de confianza, pues se ubica en uno de los supuestos previstos en el citado artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en tanto que realizó funciones de control al ocupar la plaza de Secretaría en la Dirección General del Canal Judicial, lo que conlleva realizar labores propias de un servidor público de confianza.

En esa virtud, ha quedado plenamente acreditado el carácter de confianza de las labores que desarrolló el actor al servicio de este Tribunal Constitucional, por lo que debe concluirse que en términos de lo previsto en los artículos 123, Apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º y 7º de la Ley Federal de los Trabajadores al





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Servicio del Estado, no está protegido en cuanto a la estabilidad en el empleo, por lo que carece de acción y derecho para pretender la Indemnización Constitucional.

En otro orden de ideas, la determinación de base o de confianza de un nombramiento de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya quedó apuntado, debe realizarse atendiendo a la naturaleza de las funciones que desarrollan, en términos de lo dispuesto en los artículos 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a saber:

Del contenido de los preceptos jurídicos señalados se advierte que todo servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenga a su cargo funciones de vigilancia, control manejo de recursos, adquisiciones o inventarios, también tendrán el carácter de servidores públicos de confianza.

**TERCERO. PRESCRIPCIÓN.-** A partir del otorgamiento del último nombramiento al hoy actor de Secretaria, Rango C, puesto de confianza en el año de 2008, estuvo en posibilidad de oponerse a la designación emitida e indicar que las funciones que realizaba no tenían la naturaleza de confianza, circunstancia que consintió en virtud de que de conformidad con el artículo 113 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, contaba con un mes para hacer tal reclamo, lo que puede ser constatado en el expediente personal del actor, al observarse que con fecha 4 de septiembre de 2008, se le otorgó el nombramiento para ocupar la plaza de Secretaria, Rango C, puesto de confianza, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil ocho, documento que fue recibido por el actor el 19 de enero de 2009, el cual fue considerado de confianza, por ende, al no realizar reclamo alguno dentro del mes siguiente al que tuvo conocimiento de

ello, precluyó su derecho para hacerlo, por lo tanto, se entiende que consintió tanto las condiciones de trabajo, las características del puesto (de confianza), y las funciones a desarrollar en él.

Tiene aplicación en su parte conducente la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, Novena Época, Instancia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Marzo de 2006, consultable en la página 11, Tesis: P. XXXII/2006, cuyo rubro y texto son:

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL CÁLCULO DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA NULIDAD DE UN NOMBRAMIENTO, EN RELACIÓN CON SU NATURALEZA DE BASE O DE CONFIANZA, QUE PREVÉ EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INICIA HASTA QUE EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE ENTREGA AL TRABAJADOR”** (Se transcribe).

En relación con la anterior excepción, al haber sido nombrado, si el actor estaba en oposición al nuevo nombramiento otorgado en la Dirección General del Canal Judicial contaba con el término de un mes para oponerse a la designación, por lo que a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de esa situación, tenía un mes para instaurar demanda en contra de dicha determinación, empero dejó de (sic) transcurrir en su perjuicio dicho plazo, medio de defensa que tiene plena aplicación al caso concreto y por tratarse de una excepción de carácter perentorio, si esa Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, la considera procedente, no debe de analizar los aspectos que atañen al fondo del asunto planteado, acorde con lo dispuesto por la jurisprudencia 405, sustentada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo V, Volumen 1, Materia de Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete de dos mil, de aplicación obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley 7 de Amparo, que establece:

**“PRESCRIPCIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO.”** (Se transcribe).

Ahora bien, en virtud de que el actor tuvo conocimiento de su nombramiento el 19 de enero de 2009, es a partir de esta fecha, cuando corre el término prescriptivo de un mes que señala el artículo 113, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y concluyó el 18 de febrero de 2009; sin embargo, al haber presentado su demanda hasta el tres (sic) de mayo de dos mil once, según sello de la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, dejó transcurrir en su perjuicio con exceso el lapso de un mes que la ley adjetiva le concede para producir su queja laboral, por lo tanto precluyó su acción.

Lo anterior se corrobora con el expediente personal número 61138, por lo que solicito sea requerido el mismo a la Dirección General de Recursos Humanos para que se compruebe que en las fojas que lo integran se encuentran agregados los documentos mencionados y que se ofrecen como prueba, a fin de acreditar que su derecho había prescrito.

En efecto, analizado de manera acuciosa la excepción planteada en este apartado, válidamente se puede concluir que la acción que ejercite el hoy actor en contra del Alto Tribunal o

del suscrito, se encuentra prescrita y consecuentemente esa Comisión deberá emitir un proyecto de dictamen para ser puesto a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se proponga la absolución lisa y llana, y se determine lo improcedente de su acción.

Encuentra sustento lo expuesto en párrafos precedentes, en la jurisprudencia 406 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 335, del Tomo V, Volumen 1, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil que establece:

**“PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE.”** (Se transcribe).

**CUARTO. FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-** Del demandante para solicitar el pago de horas extras en virtud de que el actor no las laboró y por ende no generó el derecho a pago alguno por ese concepto, en razón de que en el nombramiento conferido de Secretaría, Rango C, puesto de confianza se asentó que la jornada de trabajo es Diurna y por disposición del artículo 21 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se considera trabajo diurno el comprendido entre las trece y las veinte horas, el C. Juan Pablo Huerta García contaba con un horario de las trece a las veinte horas, de lunes a viernes, por lo que la pretensión de remunerarse tiempo extraordinario es improcedente, en razón de que no existió la prestación de tiempo extraordinario por parte del actor, además que el inverosímil que haya laborado el horario que relata en su demanda pues no existen registros de la prestación del servicio, así como la petición y autorización del Alto Tribunal para prolongar la jornada de trabajo. Resulta ilustrativo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**"HORAS EXTRAS. ES LEGAL, QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL."**  
(Se transcribe).

De manera cautelar y sin que ello implique reconocimiento de acción o derecho alguno a favor del actor, con fundamento en el artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, **OPONGO FORMALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN** respecto de toda reclamación que formule la parte actora por concepto de pago de tiempo extra o cualquier otra prestación que el actor reclame por un periodo superior a un año comprendido entre el 3 de mayo de 2011 (fecha de presentación de la demanda) y el 2 de mayo de 2010, toda vez que tales reclamaciones se encontrarían prescritas al haber transcurrido en exceso el plazo de un año establecido por el precepto legal previamente invocado, para formular cualquier reclamación al respecto.



**QUINTO. EXCEPCIÓN DE PAGO.-** En relación a las "Asignaciones Adicionales" correspondientes al primer periodo del año 2011, ya que le fue cubierto al actor en el mes de marzo de 2011, como se acreditará con el informe que emita la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad a propuesta de nuestra parte y que será ofrecida como Prueba Documental Pública en la presente contestación y que tendrá como objeto probar que al demandante se le pagó dicho concepto en el periodo indicado.

**SEXTO. FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-** Del actor para reclamar el pago de asignación trimestral de veintidós mil quince pesos, por tratarse de una prestación extralegal le corresponde al actor probar su otorgamiento. Resulta ilustrativo de lo anterior, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

**“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATANDOSE DE.”**(Se transcribe).

**SÉPTIMO. EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA.-** En relación con la prestación denominada ayuda de despensa, consistente en el beneficio económico anual para los servidores públicos de mando medio y personal operativo con el fin de coadyuvar a solventar sus gastos de fin de año que se cubre en el mes de noviembre, es aplicable al personal que se encuentre en servicio activo al momento de su pago, por lo tanto al haber causado baja el actor por abandono del empleo al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril y el dos y tres de mayo de dos mil once, decretándose su baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se ubica en los supuestos de pago de la misma, para acreditar mi dicho se ofrece como prueba del suscrito el informe que tenga a bien rendir sobre ese rubro el Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de lo acordado en la cuarta sesión ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil once, por el Comité de Gobierno y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Administración, por el que los señores Ministros integrantes del referido Comité, aprobaron en los términos planteados entre otros, los "Lineamientos homologados sobre las remuneraciones para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación".

#### **OCTAVO. EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA.-**

Del actor para reclamar el pago de ayuda de vestuario, consistente en el beneficio económico anual para los servidores públicos que sean considerados por los Órganos de Gobierno para la adquisición de ropa, a fin de que acudan a sus labores acorde a las actividades que realizan, el pago se realiza mediante cheque o depósito por nómina entre los meses de octubre, noviembre o diciembre del año correspondiente, es aplicable al personal que se encuentre en servicio activo al momento de su pago, por lo tanto al haber causado baja el actor por abandono del empleo al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril y el dos y tres de mayo de dos mil once, decretándose su baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se ubica en los supuestos de pago de la misma, para acreditar mi dicho se ofrece como prueba del suscrito el informe que tenga a bien rendir sobre ese rubro el Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de lo acordado en la cuarta sesión ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil once, por el Comité de Gobierno y Administración, por el que los señores Ministros integrantes del referido Comité, aprobaron en

los términos planteados entre otros, los "Lineamientos homologados sobre las remuneraciones para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación".

Una vez que se hicieron valer las excepciones que anteceden, se procede a contestar lo hechos, ya sea controvirtiéndolos, aclarándolos o negándolos de la siguiente forma:

## HECHOS

1.- El hecho 1º que se contesta es parcialmente cierto en cuanto al inicio del nombramiento que fue a partir del primero de febrero de dos mil ocho, siendo un nombramiento por tiempo fijo con efectos al treinta de abril de dos mil ocho, lo que no es cierto es lo relativo al salario mensual que era de \$15,230.32 M.N., de acuerdo al nombramiento expedido el 9 de mayo de 2008, aspecto que se probará con el nombramiento que se encuentra glosado en el expediente personal del demandante y que será ofrecido como prueba documental pública por el suscrito en el capítulo correspondiente de esta contestación para que sea exhibido por el Director General de Recursos Humanos de este Alto Tribunal previo requerimiento de esa H. Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. Tampoco es cierto lo relativo a que desempeñara una categoría de productor de video y audio, ya que dicho puesto no existe en este Alto Tribunal, como se acreditará con la exhibición de los puestos existentes en este Alto Tribunal y que se encuentran consignados en el anexo 1 del Acuerdo General Plenario 10/2009, que será ofrecido en esta contestación como prueba documental pública.

Por otro lado, en su momento el hoy actor estuvo en posibilidad de oponerse al nombramiento que se le dio de Secretaria, Rango C, puesto de confianza e indicar que las funciones que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

realizaba no tenían la naturaleza de confianza, circunstancia que consintió en virtud de que de conformidad con el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, contaba con un mes para hacer tal reclamo, lo que puede ser constatado en el expediente personal del actor, al observarse la fecha en que recibió el último nombramiento que se le otorgó para ocupar la plaza de Secretaria, Rango C, puesto de confianza, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil ocho, el cual fue considerado de confianza, por ende, al no realizar reclamo alguno dentro del mes siguiente al que tuvo conocimiento de ello, precluyó su derecho para hacerlo, por lo tanto, se entiende que consintió tanto las condiciones de trabajo, las características del puesto (de confianza), y las funciones a desarrollar en él.

Tiene aplicación en su parte conducente la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, Novena Época, Instancia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Marzo de 2006, consultable en la página 11, Tesis: P. XXXII/2006, cuyo rubro y texto son:

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL CÁLCULO DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA NULIDAD DE UN NOMBRAMIENTO, EN RELACIÓN CON SU NATURALEZA DE BASE O DE CONFIANZA, QUE PREVÉ EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INICIA HASTA QUE EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE ENTREGA AL TRABAJADOR.”** (Se transcribe).

2. El hecho 2º que se contesta al ser apreciaciones subjetivas y unilaterales del actor ni se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios.

3. El hecho 3º que se contesta al ser apreciaciones subjetivas y unilaterales del actor ni se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios. Aclarando que tuve conocimiento por comentario del Subdirector General de Producción que el día 9 de marzo de 2011, había existido un acto de insubordinación del hoy actor, persona que se disculpó al día siguiente (10 de marzo de 2011) por la conducta asumida de desacato.

4. El hecho 4º que se contesta es parcialmente cierto en cuanto a que el Canal Judicial por las necesidades del servicio laboró en ese día, lo que no es cierto es que el actor haya trabajado una jornada mayor a la asignada en su nombramiento ya que se retiró a las ocho de la noche conforme a su horario de trabajo.

5.- El hecho 5º que se contesta al ser apreciaciones subjetivas y unilaterales del actor ni se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios: Aclarando que tuve conocimiento por comentario del Subdirector General de Producción que por necesidades del área el día 22 de marzo de 2011, había asignado nuevas actividades al hoy actor, derivado de su experiencia obtenida en canales de televisión privados y que la experiencia lograda por el actor sería en provecho del canal.

Es ilustrativa al caso la siguiente Tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son las siguientes:

TESIS Núm. XXXIX/2006 (PLENO)

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. EL PATRÓN EQUIPARADO PUEDE MODIFICAR UNILATERALMENTE SUS FUNCIONES SIEMPRE Y CUANDO LAS DIVERSAS QUE LES ASIGNE SEAN ACORDES A LOS CONOCIMIENTOS Y APTITUDES QUE SE**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**TOMARON EN CUENTA PARA SU DESIGNACIÓN.”** (Se transcribe).

6. El hecho 6º que se contesta es parcialmente cierto en cuanto a la celebración de la reunión en la oficina del Doctor José Manuel Rodríguez Reyes, lo que no es cierto es que en dicha reunión se le haya presionado para presentar su renuncia, pues dicha reunión tuvo como objetivo aclarar la insubordinación cometida por el hoy actor y aclarar las nuevas funciones asignadas por el Subdirector General de Producción, a efecto de evitar fricciones innecesarias entre el personal.

7. El hecho 7º que se contesta es parcialmente cierto en cuanto a la petición del actor de reunirse con el suscrito el día 24 de marzo de 2011, junta que se llevó a cabo en mi oficina, lo que no es cierto y es falso de toda falsedad es que se le haya insistido en la presentación de una renuncia, ya que el objeto de la reunión pedida por el actor era conocer su punto de vista por el desacato cometido, aspecto que el hoy demandante no pudo aclarar su acto de insubordinación, procediendo a retirarse de mi oficina sin mayores contratiempos. Resulta ilustrativo de lo anterior, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación.

**“RENUNCIA. NEGATIVA DE LA COACCIÓN PARA OBTENERLA. CARGA DE LA PRUEBA.”** (Se transcribe).

En relación con las Excepciones y Defensas planteadas, así como la contestación a los hechos de la demandante, efectúo las siguientes manifestaciones en relación con el derecho y pruebas ofrecidas por el actor.

*Niego el derecho que cita el actor, ya que el procedente para el caso que nos ocupa es el artículo 8º y la fracción I, del artículo 46, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.*

**SEXTO.** El seis de julio de dos mil once se llevó a cabo la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la que se admitieron y desahogaron las pruebas que cumplieron con los respectivos requisitos legales.

**SÉPTIMO.** Seguido el juicio en todas sus fases procesales, una vez desahogadas todas las pruebas admitidas a las partes, por auto de nueve de septiembre de dos mil once se declaró cerrada la instrucción en este conflicto de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y se ordenó turnar este expediente al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para la formulación del dictamen respectivo.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** El Pleno de la Suprema Corte es competente para resolver este conflicto laboral, según lo disponen los artículos 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 152, 153 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que se trata de un conflicto de trabajo promovido por un gobernado que prestó sus





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

servicios a este Alto Tribunal, en el cual reclama el pago y cumplimiento de diversas prestaciones laborales; y, además, la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ya tramitó el procedimiento en términos de lo previsto en los artículos 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y emitió el dictamen a que se refiere el artículo 153 de ese último ordenamiento legal y 1° del Reglamento de Trabajo de dicha Comisión Substanciadora, aprobado en el Acuerdo 8/89 del Pleno de este Alto Tribunal.

**SEGUNDO.** La acción principal que ejerce el actor Juan Pablo Huerta García es la de indemnización constitucional por despido injustificado, la que sustenta en el hecho de que el veinticuatro de marzo de dos mil once, encontrándose en una junta con el Director General del Canal Judicial Enrique Rodríguez, así como con el subdirector de producción Marco Antonio Silva, quien era su superior inmediato, y con el doctor Manuel Rodríguez al momento de levantarse y despedirse, recibió la indicación por parte de alguno de ellos (sin especificar de quién), que tenía dos horas para firmar su renuncia, por lo que pidió más tiempo, y entonces le refirieron que tenía hasta el veinticinco de los referidos mes y año a las once de la mañana para hacerlo.

El demandado Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opuso entre otras, la excepción de falta de legitimación activa del actor para demandar la indemnización constitucional por tratarse de un trabajador que desempeñó un puesto catalogado como de confianza en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que en términos de lo que dispone el diverso 8° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentra excluido del régimen de ésta

ley, en consecuencia, carece del derecho a la estabilidad en el empleo, ya que los trabajadores que como él, se desempeñan en un puesto catalogado por la ley como de confianza, conforme lo establece la fracción XIV, del apartado B del artículo 123 constitucional, únicamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y del régimen de seguridad social.

Precisado lo anterior, en congruencia con la litis planteada en este conflicto de trabajo, en principio se aborda el estudio de la excepción de falta de legitimación opuesta por el demandado, ya que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preponderante dado que es inherente a una condición de la acción, pues implica la necesidad de que el actor ejerza un derecho que jurídicamente le corresponde, es decir, que cuente con la titularidad del derecho que ejerce.

Por tanto, como la legitimación en la causa incumbe a la titularidad del derecho que se ejerce, en consecuencia, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, lo que significa que la demanda sea instaurada por la persona a la que la ley otorga la titularidad del derecho cuestionado en el respectivo procedimiento.

El criterio anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 75/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

**“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.** Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de *ad procesum* y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de **la legitimación ad causam** que **implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio**. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. **La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.**"

En atención a lo antes precisado, y con el objeto de determinar si el actor está legitimado en la causa, conviene dejar establecido el marco jurídico que regula los nombramientos de confianza en el Poder Judicial de la Federación, a cuyo efecto se acude al texto de los artículos 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º, 5º, fracción IV, 6º, 7º, 8º y 20 de la invocada ley burocrática, así como a los numerales 180, 181 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los que en lo conducente, disponen:

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

**"ARTÍCULO 123.** Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A...

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

(...)

**XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza.** Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social".

#### LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

**"Artículo 4º.** Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base.

**Artículo 5º.** Son trabajadores de confianza:

(...)

IV. En el Poder Judicial: los Secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas.

**Artículo 6º.** Son trabajadores de base:

Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente.

**Artículo 7º.** Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el artículo 5º, la clasificación de base o de confianza que les corresponda, se determinará expresamente por la disposición legal que formalice su creación.

**Artículo 8º.** Quedan excluidos del régimen de esta ley, los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5º...

(...)

**Artículo 20.** Los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, se clasificarán conforme a lo señalado por el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal...”.

## LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

**“Artículo 180. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de confianza,** el secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de acuerdos, los actuarios, la persona o personas designadas por su Presidente para auxiliarlo en las funciones administrativas, el Coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, los directores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de departamento, **el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general** o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.

**Artículo 181.** Tendrán también carácter de servidor público de confianza, los secretarios ejecutivos, los secretarios de comisiones, los secretarios técnicos, los titulares de los órganos, los coordinadores generales, directores generales, directores de área, visitantes, defensores públicos, asesores jurídicos y personal técnico del Instituto Federal de Defensoría Pública, de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, subdirectores, jefes de departamento, oficiales comunes de partes, el personal de apoyo y





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, cajeros, pagadores y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisición o inventarios.

**Artículo 182.** Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, no previstos en los dos artículos anteriores, serán de base”.

De los artículos transcritos se advierte, en lo que aquí interesa, que los trabajadores de confianza al servicio del Poder Judicial de la Federación, se encuentran excluidos del régimen de la ley laboral burocrática en cuanto a la estabilidad en el empleo, pues jurídicamente sólo se les conceden los beneficios de protección al salario y del régimen de seguridad social, por lo que quedan limitados sus derechos al no corresponderles el de estabilidad en el empleo, lo que implica que no son titulares del derecho a la reinstalación o indemnización constitucional por despido o suspensión injustificados, dado que la ley no se los confiere.

Cabe señalar, que con lo establecido en la citada fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, en el sentido de que “la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social”, el Poder Revisor de la Constitución expresó su voluntad de limitar los derechos laborales de ese tipo de trabajadores, ya que al precisar los derechos derivados de los servicios que prestan los trabajadores de confianza en los cargos que ocupan en los términos puntualizados, esto es, de protección al salario y los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, los excluye del derecho a la estabilidad en el empleo que solamente consagra para los trabajadores de base, por lo que del derecho a solicitar la reinstalación o en su defecto la indemnización constitucional ante un supuesto despido o suspensión injustificados, es claro que constitucional y

legalmente, los trabajadores de confianza quedan al margen por exclusión de esa prerrogativa, al no haberles sido reconocida.

En esa medida, el legislador ordinario con la facultad que le otorgó el propio Poder Revisor de la Constitución, excluyó a los trabajadores de confianza de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en su artículo 8º y, asimismo, señaló los cargos que son de confianza, en lo que aquí interesa, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto resulta ilustrativo, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que lleva por rubro: **"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Octubre de 2003, tesis 2a. CXVII/2003, página 65; así como en la tesis que a continuación se identifica:

**"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.** El artículo 123, apartado B, establece cuáles son los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza; configura, además, limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplicables a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente **la fracción XIV de este mismo apartado los limita** en cuanto a su aplicación íntegra, **puesto que pueden**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este apartado."*

No. Registro: 198,723. Tesis aislada. Materia(s): Laboral, Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Mayo de 1997. Tesis: P. LXXIII/97. Página: 176.

De la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 180 al 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, antes transcritos, se arriba al convencimiento de que, con independencia de que a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y, en específico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se les otorgue algún nombramiento de confianza de los previstos en los artículos 5° y 180 citados, debe atenderse a la naturaleza del trabajo desempeñado y no a la mera denominación del puesto en el respectivo nombramiento.

En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL"**. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Junio de 2004. Tesis: P. XXXII/2004. Página: 7.

Bajo ese contexto, se entra al estudio de la excepción de falta de legitimación en la causa, que hace valer el demandado,

a cuyo respecto deben tomarse en cuenta los elementos de convicción allegados al expediente laboral para determinar si el actor ejerce un derecho del que jurídicamente no tiene la titularidad, como es el de la indemnización constitucional y, como consecuencia, tampoco de sus accesorios.

De la documental consistente en el original del expediente personal 61138 que a nombre del actor Juan Pablo Huerta García se lleva en la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrecida como prueba por el demandado, se desprende que obran las incidencias propias de la relación laboral, entre las que destacan las constancias siguientes:

1. Nombramiento definitivo expedido por el Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual designa al actor, como **Secretaria, Rango C, puesto de confianza**, adscrito a la Dirección General del Canal Judicial del citado Máximo Tribunal, con efectos a partir del uno de agosto de dos mil ocho (fojas 35), el que en lo conducente, es del siguiente tenor:

**"PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCIÓN  
GENERAL DE PERSONAL**

C. JUAN PABLO HUERTA GARCÍA

**Exp. 61138**

**Adscripción: Dirección General del Canal Judicial**

*El Comité de Gobierno y Administración en su sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos mil ocho, autorizó en su favor el*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**nombramiento definitivo para ocupar el cargo de Secretaria, Rango C, puesto de confianza, con efectos a partir del primero de septiembre de dos mil ocho, en la plaza número 2816, creada mediante Acuerdo General Plenario 15/2006, adscrita a la Dirección General del Canal Judicial.**

**Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.**

**México, D. F., a 04 de Septiembre de 2008.**

**OFICIAL MAYOR**

**(Firma ilegible).**

**LIC. JORGE SIERRA GARCÍA DE LEÓN."**

Cabe destacar que en el reverso del documento de referencia, donde aparece el nombre de Juan Pablo Huerta García, se encuentra su firma ilegible, **"al aceptar el puesto a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso"**, y declara **"HABER PROTESTADO"** conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", como lo hizo constar el licenciado Manuel Juan Corvera Canaza, Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de que el propio uno de septiembre de dos mil ocho el mencionado actor **"toma posesión del puesto a que se refiere este nombramiento"** (fojas 39 frente y vuelta).

2. Aviso de baja del actor Juan Pablo Huerta García del "Puesto: **SECRETARIA, PUESTO DE CONFIANZA, RANGO C**", con adscripción en la Dirección General del Canal Judicial, en el que se consigna como "Fecha de Baja: **04 DE MAYO DE 2011**" y "Motivo: **POR ABANDONO DE EMPLEO**" (fojas 61 del expediente personal).

De las anteriores constancias relacionadas, se advierte que el nombramiento que regía la relación laboral hasta el cuatro de mayo de dos mil once en que se decretó la baja del actor Juan Pablo Huerta García, es el que se le expidió a partir del uno de septiembre de dos mil ocho como ***“Secretaria, Rango C, puesto de confianza, con efectos a partir del primero de septiembre de dos mil ocho, en la plaza número 2816, creada mediante Acuerdo General Plenario 15/2006, adscrita a la Dirección General del Canal Judicial”***, cargo que aceptó desempeñar el actor con la retribución del sueldo bruto y demás prestaciones mensuales que corresponden al puesto y rango conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario o de Administración que resulte aplicable, pues consta en el nombramiento relativo la firma de aceptación de dicho trabajador y la constancia de que tomó posesión de ese cargo, como así lo reconoce en su escrito de demanda laboral al aseverar que es en el que se desempeñó y del que fue despedido injustificadamente, razón por la cual reclama la indemnización constitucional.

Luego, con las referidas constancias que obran en el original del expediente personal que del actor se formó en la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el valor probatorio que antes se les concedió, **se acredita que el puesto de Secretaria, Rango C**, que el actor reconoce haber desempeñado hasta el cuatro de mayo de dos mil once en que se decretó su baja, **está contemplado como de confianza en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación**, antes transcrito, particularmente, por encontrarse comprendido en el **personal de apoyo “de los servidores públicos de nivel de director general”**, este último, en el que se ubica el demandado Director General del Canal Judicial.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Lo anterior es así, toda vez que las funciones que desempeñaba el actor en ese puesto de secretaria, rango C, efectivamente son de confianza como lo consigna su nombramiento, lo cual se corrobora con las propias manifestaciones del actor realizadas en su escrito de demanda laboral, relativas a que prestó sus servicios en el cargo de secretaria, ***“en el Canal Judicial de la Federación, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”*** ***“desempeñaba mis servicios en dicha dependencia, teniendo como jefe inmediato al Sr. Roberto Espinosa Ibarra después al Subdirector de producción al Sr. Marco Antonio Silva y el (sic) Director General Sr. Enrique Rodríguez”***. (fojas 1-2 del expediente laboral).



Las referidas manifestaciones del actor Juan Pablo Huerta García, constituyen confesión expresa y espontánea en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la especie, en el sentido de que las funciones de confianza de secretaria, rango C, las realizaba en apoyo de quien entonces era uno de sus jefes, que es precisamente el demandado Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es claro que estaba comprendido en ***“el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general”*** (artículo 180 de la invocada ley orgánica), en el caso concreto, de un nivel de director general, como es el mencionado demandado.

Sin que obste a la conclusión alcanzada, su argumento en el sentido de que las funciones que desempeñaba no eran de confianza, porque *“en realidad por la naturaleza de la función desempeñada y las labores encomendadas no se encuentran en los*

enumerados en el artículo 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado” (fojas 1 del expediente laboral), pues tal aseveración se encuentra desvirtuada al estar contemplada su calidad de trabajador de confianza en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del que se desprende que tienen el carácter de servidores públicos de confianza **“el personal de apoyo [...] de los servidores públicos de nivel de director general”**, por tanto, al haber reconocido implícitamente el actor que prestaba apoyo en su calidad de secretaria, rango C, a un funcionario con nivel de director general, tal como lo es el Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello implica que, legalmente, se trata de un trabajador de confianza por las funciones que de esa naturaleza corresponden al puesto que desarrollaba.

Por consiguiente, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana favorecen al demandado, toda vez que apreciando en conciencia los referidos elementos de convicción allegados al procedimiento laboral, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, resolviendo a verdad sabida y buena fe guardada en términos del artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como de conformidad con lo establecido en el diverso 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la especie, queda acreditado que el puesto de secretaria, rango C, que el actor Juan Pablo Huerta García aceptó haber desempeñado, está contemplado como de confianza por el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y las labores que realizó fueron de la misma naturaleza de conformidad con el citado numeral, pues queda comprendido en el personal de apoyo de un servidor público de nivel de director general, como es el demandado, al que el actor estaba adscrito, por lo que no





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

tiene la titularidad del derecho a la indemnización constitucional que ejerce, ya que constitucional y legalmente no se reconoció a los trabajadores que como el actor son de confianza, quedando así excluidos del régimen de la invocada ley burocrática en términos de su artículo 8°.

En esas condiciones, resulta improcedente, por falta de legitimación en la causa, la demanda laboral instaurada por Juan Pablo Huerta García en contra del Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la indemnización constitucional y sus accesorios, por no corresponder al mencionado actor la titularidad del derecho a la indicada indemnización que ejerce, en términos de lo antes puntualizado.

En consecuencia, se **absuelve** al demandado Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pagar al actor la indemnización constitucional, así como de sus accesorios consistentes en el pago de los salarios caídos que se generen a partir del injustificado despido de que dice haber sido objeto y hasta que se dé cumplimiento al laudo.

**TERCERO.** En otro tenor, es procedente la demanda laboral por lo que se refiere a las restantes prestaciones reclamadas inherentes a las medidas de protección al salario, respecto de las que el actor tiene legitimación activa, por ser autónomas e independientes de la acción de indemnización constitucional por despido injustificado, que se declaró improcedente por falta de legitimación activa.

En relación con el pago del tiempo extraordinario reclamado en el inciso d), el actor desahogó la prevención

mediante proveído de veinte de mayo de dos mil once, al manifestar que en la fecha de ingreso a su trabajo se le había asignado un horario de labores de las 14:00 a las 24:00 horas de lunes a viernes descansando sábados y domingos de cada semana.

También precisó que en dichas condiciones estuvo laborando hasta el año dos mil diez que con motivo del Bicentenario de la Independencia de la República Mexicana y el Centenario de la Revolución Mexicana el trabajo se incrementó para todo el personal del Canal Judicial, por lo que desde el cuatro de enero del dos mil diez "*empezamos*" a salir hasta las 3:00 ó 4:00 de la mañana todos los días, con el pretexto de que era cooperación para darle brillantez a las festividades que se aproximaban, se dijo que era por órdenes superiores, que esa jornada la tuvo hasta un día antes del veinticuatro de marzo de dos mil once, en que laboró cinco horas extras diariamente, las que jamás le fueron cubiertas, excepción hecha de los días diecisiete de marzo del año en cita, en que laboró hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente y del día veintiuno de marzo del mismo año, hasta las 6:00 de la mañana, con tales aclaraciones reclamó el pago del tiempo extraordinario en términos de lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley Federal del Trabajo.

En relación con el pago de las horas extras reclamadas el demandado adujo que el actor carecía de acción y derecho en virtud de que nunca laboró jornada extraordinaria y por ende, tampoco generó el derecho a pago alguno por ese concepto, en razón de que en el nombramiento conferido de Secretaria, Rango C, puesto de confianza se asentó que la jornada de trabajo es Diurna y por disposición del artículo 21 de la Ley



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las veinte horas, por lo que si se tenía en cuenta que Juan Pablo Huerta García contaba con un horario de las 13:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes, resultaba que la pretensión de remunerarle tiempo extraordinario era improcedente, además de ser inverosímil que lo hubiera laborado en el lapso que señala el referido actor.

Para dilucidar la procedencia o no del pago de horas extras, en primer término se tiene en cuenta que el demandado opuso la excepción de prescripción, por ser de estudio preponderante y de orden público, por lo que en todo caso, se analizará esa reclamación con un año de anterioridad a la fecha de presentación de la demanda (13 de mayo de 2011), es decir, el derecho de las supuestamente generadas desde el 12 de mayo de 2010.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de la jornada extraordinaria, o sobre el número o cantidad de horas trabajadas, siempre corresponde al patrón en los términos del artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo (de aplicación supletoria en el presente caso), acorde con la tesis de jurisprudencia publicada con el número 126, en la página 111, Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, reiterada con el número 925 en la Compilación de 1988, Segunda Parte: **"HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA DE LAS."**, y puede válidamente demostrar tales extremos con las pruebas que tenga a su alcance y no de modo limitado o exclusivo con aquellas que enumera el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo.

Este pronunciamiento también fue confirmado por la Sala en cita, en la contradicción de tesis 138/98, además de compartir el criterio emitido por la otrora Cuarta Sala que considera que cuando el cumplimiento de la regla anterior conduce, en la etapa de la valoración probatoria, a resultados absurdos, ilógicos, irracionales o inverosímiles, como cuando el tiempo extraordinario que se reclama es excesivo, por comprender muchas horas extras diarias durante un lapso considerable, de modo que su cumplimiento sea increíble conforme a la naturaleza del hombre, por no ser racionalmente plausible que una persona pueda laborar en esas condiciones, sin disfrutar del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, entonces, aunque el patrón no haya logrado demostrar que el actor sólo laboró la jornada legal, la autoridad puede, válidamente, absolverlo del tiempo extraordinario que se le reclame, puesto que por disposición del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, debe dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada; aunque deberá fundar y motivar su resolución, explicando las circunstancias o hechos que la lleven a estimar que la reclamación formulada resulta increíble, absurda o ilógica.

En este orden de ideas, tratándose del reclamo del pago de horas extraordinarias, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia, o sobre el número o cantidad de horas trabajadas, siempre corresponde al patrón, con las pruebas que tenga a su alcance.

En el caso a estudio, el demandado únicamente adujo que no procedía el pago de las horas extras porque el





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

trabajador tenía una jornada diurna, situación que si bien es cierto se advierte de los nombramientos que en su oportunidad suscribió que la jornada máxima semanal es de cuarenta horas, no menos cierto es que tal medio demostrativo por sí solo es insuficiente para tener por acreditado que durante la existencia de la relación laboral se haya respetado la estipulación anotada, de ahí que ese medio de prueba no resulte idóneo para justificar la duración de la jornada laboral.

Acerca del mismo tema, la Segunda Sala ha establecido que, en todo caso, el valor probatorio de lo afirmado por el trabajador en cuanto a la duración de la jornada laboral se encuentra limitado a que se funde en circunstancias acordes con la naturaleza humana y cuando ello no ocurre como cuando la reclamación se funde en circunstancias inverosímiles porque se señala una jornada excesiva, la autoridad correspondiente puede válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la etapa de valoración de las pruebas se deberá fallar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de la reclamación

En el presente asunto el actor manifestó que en la fecha de su ingreso (1º de febrero de 2008) se le asignó un horario de labores de las 14:00 a las 24:00 horas de lunes a viernes descansando sábados y domingos de cada semana, así como que a partir del cuatro de enero del dos mil diez "empezamos" a salir hasta las 3:00 y 4:00 de la mañana todos los días, con el pretexto de que era cooperación para darle brillantez a las festividades que se aproximaban, ya que esto era por órdenes superiores, todo ello hasta un día antes del veinticuatro de marzo de dos mil once.

Por la forma y los términos en los que la parte actora adujo su jornada laboral al manifestar que durante el último año de labores su jornada era de las 14:00 a las 3:00 ó 4:00 horas del día siguiente, es decir, jornadas de trece o catorce horas diariamente (de lunes a viernes) siendo que por tratarse de una jornada nocturna debía laborar siete horas por jornada, constituye un elemento claro para considerar que no es razonable el reclamo, por lo que válidamente se puede apartar la resolución formal y obtener una basada en que la apreciación en conciencia no permite humanamente desarrollar el ritmo de trabajo ininterrumpido que refirió el trabajador en su demanda, de ahí que la reclamación contenida en el inciso d) del proemio de demanda laboral también se declare improcedente.

El criterio anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 7/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

***“HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.*** *Tratándose del reclamo del pago de horas extras de labores, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia o sobre la duración de la jornada, siempre corresponde al patrón, pero cuando la acción de pago de ese concepto se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de control constitucional, debe resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia."

Novena Época; Registro: 175923; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIII, febrero de 2006; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 7/2006; Página: 708.

En consecuencia, se **absuelve** al demandado Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pagar al actor la prestación consistente en el pago de tiempo extraordinario reclamado.

**CUARTO.** Por otra parte, en el inciso e) del proemio de demanda laboral, el actor reclama el pago proporcional al tiempo laborado en el año dos mil once por los conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, además del pago de las prestaciones extralegales denominadas asignaciones adicionales (bono cuatrimestral), asignación trimestral de veintidós mil quince pesos, ayuda de despensa anual y ayuda de vestuario.

Respecto de las prestaciones consistentes en el pago proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, el demandado esencialmente adujo que derivado del hecho de que el demandante sólo prestó sus servicios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el lapso comprendido del uno de enero al uno de abril de dos mil once, el pago de tales prestaciones sería cubierto en forma proporcional al tiempo efectivo de servicios.

En consecuencia, al no obrar en autos pruebas que acrediten el pago de tales prestaciones procede **condenar** al

demandado a pagar al actor la parte proporcional de las prestaciones de que se trata, es decir, únicamente por lo que se refiere al periodo laborado en el año dos mil once.

**QUINTO.** Respecto de la prestación denominada asignaciones adicionales (bono cuatrimestral), el demandado hizo valer la excepción siguiente:

*“En relación a las “Asignaciones Adicionales” correspondientes al primer periodo del año 2011, ya que le fue cubierto al actor en el mes de marzo de 2011, como se acreditará con el informe que emita la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad a propuesta de nuestra parte y que será ofrecida como Prueba Documental Pública en la presente contestación y que tendrá como objeto probar que al demandante se le pagó dicho concepto en el periodo indicado.” (Folio 42).*

El informe de referencia se admitió en la audiencia de ley y quedó desahogado a foja 245, con el recibo de pago que comprende la prestación denominada *“asignaciones adicionales correspondiente a los meses de enero a marzo de 2011”*, por la cantidad de *“\$14,264.66”* (catorce mil doscientos sesenta y cuatro pesos 66/100 moneda nacional), en dicha documental se aprecia la leyenda de abono a cuenta, por lo que esta prestación resulta improcedente en el presente asunto.

En cuanto a la prestación denominada asignación trimestral de veintidós mil quince pesos fue controvertida por el demandado con el siguiente argumento:





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**“SEXTO. FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.-** Del actor para reclamar el pago de asignación trimestral de veintidós mil quince pesos, por tratarse de una prestación extralegal le corresponde al actor probar su otorgamiento. Resulta ilustrativo de lo anterior, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación: **“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATANDOSE DE.”**

Es fundada la defensa referida toda vez que respecto de dicha prestación la demandada negó en términos generales su existencia y procedencia, motivo por el que la parte actora que alegó el otorgamiento de una prestación extralegal, debía acreditar en el juicio su procedencia, demostrando encontrarse en los supuestos legales requeridos y que su contraparte estaba obligada a satisfacerle la prestación que reclama y, si no lo hace, la resolución debe ser absoluta, máxime que el actor no se encontraba en servicio activo al momento de su pago.

Por otra parte, las prestaciones denominadas ayuda de despensa anual y ayuda de vestuario fueron controvertidas por el Director General del Canal Judicial con los siguientes argumentos:

**“SÉPTIMO. EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA.-** En relación con la prestación denominada ayuda de despensa, consistente en el beneficio económico anual para los servidores públicos de mando medio y personal operativo con el fin de coadyuvar a solventar sus gastos de fin de año que se cubre en el mes de noviembre, es aplicable al personal que se encuentre en servicio activo al momento de su pago, por lo tanto al haber causado baja el actor por abandono del empleo al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril y el

dos y tres de mayo de dos mil once, decretándose su baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se ubica en los supuestos de pago de la misma, para acreditar mi dicho se ofrece como prueba del suscrito el informe que tenga a bien rendir sobre ese rubro el Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de lo acordado en la cuarta sesión ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil once, por el Comité de Gobierno y Administración, por el que los señores Ministros integrantes del referido Comité, aprobaron en los términos planteados entre otros, los "Lineamientos homologados sobre las remuneraciones para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación".

**OCTAVO. EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA.-**

Del actor para reclamar el pago de ayuda de vestuario, consistente en el beneficio económico anual para los servidores públicos que sean considerados por los Órganos de Gobierno para la adquisición de ropa, a fin de que acudan a sus labores acorde a las actividades que realizan, el pago se realiza mediante cheque o depósito por nómina entre los meses de octubre, noviembre o diciembre del año correspondiente, es aplicable al personal que se encuentre en servicio activo al momento de su pago, por lo tanto al haber causado baja el actor por abandono del empleo al haber faltado sin justificación los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril y el dos y tres de mayo de dos mil once, decretándose su baja a partir del 4 de mayo de 2011, tal como se precisa en el acta que se instruyó sobre el particular de fecha tres de mayo de dos mil once, actualizándose la causal de cese por abandono de empleo señalada en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE  
SECRETARÍA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Servicio del Estado, no se ubica en los supuestos de pago de la misma, para acreditar mi dicho se ofrece como prueba del suscrito el informe que tenga a bien rendir sobre ese rubro el Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de lo acordado en la cuarta sesión ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil once, por el Comité de Gobierno y Administración, por el que los señores Ministros integrantes del referido Comité, aprobaron en los términos planteados entre otros, los "Lineamientos homologados sobre las remuneraciones para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación".

En este sentido, la demandada también invocó la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: **"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA RUEBA TRATÁNDOSE DE."**

En ese orden de ideas, correspondía al actor demostrar la procedencia de las prestaciones extralegales reclamadas, por lo que al no ofrecer prueba alguna en ese sentido, lo que procede es **absolver** al demandado de las prestaciones reclamadas, consistentes en las asignaciones adicionales, asignación trimestral de veintidós mil quince pesos, ayuda de despensa anual y ayuda de vestuario.

Por lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

**PRIMERO.** Es improcedente, por falta de legitimación en la causa, la demanda laboral instaurada por JUAN PABLO

HUERTA GARCÍA en contra del DIRECTOR GENERAL DEL CANAL JUDICIAL, respecto de la indemnización constitucional y de la prestación que demandó como accesoria de esa acción principal.

**SEGUNDO.** Es procedente la demanda laboral instaurada por JUAN PABLO HUERTA GARCÍA en contra del DIRECTOR GENERAL DEL CANAL JUDICIAL, en lo que se refiere a las prestaciones relacionadas con las medidas de protección al salario.

**TERCERO.** Se condena al DIRECTOR GENERAL DEL CANAL JUDICIAL al pago proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, en los términos expuestos en considerando cuarto de la presente resolución.

**CUARTO.** Se absuelve al DIRECTOR GENERAL DEL CANAL JUDICIAL del pago de la indemnización constitucional, los salarios vencidos, la homologación de salario, el pago del tiempo extraordinario, las asignaciones adicionales, la asignación trimestral, la ayuda de despensa anual y ayuda de vestuario reclamadas, en los términos expuestos en los considerandos segundo, tercero y quinto.

**QUINTO.** Devuélvase el expediente relativo a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de las notificaciones respectivas y, en su oportunidad, lo archive como asunto concluido.

**CÚMPLASE.**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Juan N. Silva Meza.

Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General de Acuerdos que da fe.

**EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA**

**EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.**

**LIC. RAFAEL COELLO CETINA**

La presente foja es la parte final de la sentencia en el Conflicto de Trabajo 2/2011-C, suscitado entre Juan Pablo Huerta García y el Director General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conste.